

DIEZ AÑOS DESPUÉS DE LOS ACUERDOS DE PAZ FIRME Y DURADERA



Diálogos nacionales sobre la democracia en América Latina
Un proyecto del Diálogo Interamericano y la Organización de los Estados Americanos

Guatemala: Diez años después de los acuerdos de paz firme y duradera

© 2008 Diálogo Interamericano. Todos los derechos reservados.

1211 Connecticut Avenue, NW

Suite 510

Washington, DC 20036

202-822-9002

<http://www.thedialogue.org>

Corrección de estilo: Carlos Verdecia

Diseño de portada y composición: OmniStudio, Inc.

Fotografía portada: Jonathan Moller

Otras fotografías: Pablo Zúñiga

Impreso en EE.UU.

GUATEMALA

Diez años después de los acuerdos de paz firme y duradera

Relator: Gustavo Porras Castejón

Diálogos nacionales sobre la democracia en América Latina

Un proyecto del Diálogo Interamericano y
la Organización de los Estados Americanos

ENERO 2008

Contenido

Siglas	iv
Prólogo	
Dante Caputo, Peter Hakim y Marifeli Pérez-Stable	vii
Guatemala: Diez años después de los acuerdos de paz firme y duradera	
Gustavo Porras Castejón.....	1
Logros y obstáculos a diez años de los Acuerdos de Paz	5
Instituciones políticas.....	11
Seguridad ciudadana	14
Inclusión y desigualdad	17
Partidos políticos	21
Sociedad civil.....	26
Los diez años que siguen	30
Notas	33
Indicadores 2012	36
Comentarios.....	38
Notas biográficas de los participantes	41
Agenda del Diálogo en la Antigua.....	44
Bibliografía mínima.....	47
Perfiles del Diálogo Interamericano, la OEA y la ASIES	49

Siglas

ADICA	Asociación para el Desarrollo Integral de Centroamérica
AGEXPORT	Asociación Guatemalteca de Exportadores
AIDPI	Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas
ARENA	Alianza Republicana Nacionalista
ASIES	Asociación de Investigación y Estudios Sociales
BANRURAL	Banco de Desarrollo Rural, S.A.
BCIE	Banco Centroamericano de Integración Económica
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CACIF	Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
CAS	Consejo Asesor de Seguridad
CASA	Centro de Acción Social
CEDIM	Centro de Documentación e Investigación Maya
CICIG	Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CNAP	Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz
CODISRA	Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala
COPAZ	Comisión Presidencial de la Paz
DC	Democracia Cristiana
DR-CAFTA	Tratado de Libre Comercio República Dominicana — Centroamérica — Estados Unidos
EG	Encuentro por Guatemala
ENCOVI	Encuesta Nacional de Condiciones de Vida
FDNG	Frente Democrático Nueva Guatemala
FRG	Frente Republicano Guatemalteco
GAN	Gran Alianza Nacional
IDIES	Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

INCEP	Instituto Centroamericano de Estudios Políticos
MNA	Mesa Nacional Alimentaria
MOLOJ	Asociación Política de Mujeres Mayas
nIMD	Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria
OEA	Organización de los Estados Americanos
OIC	Organización Internacional del Café
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
ONG	Organizaciones no gubernamentales
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OSC	Organizaciones de la sociedad civil
PAN	Partido de Avanzada Nacional
PARLACEN	Parlamento Centroamericano
PIB	Producto Interno Bruto
PNC	Policía Nacional Civil
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PP	Partido Patriota
PU	Partido Unionista
SAT	Superintendencia de Administración Tributaria
TSE	Tribunal Supremo Electoral
UNE	Unión Nacional de la Esperanza
UNRG	Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
URL	Universidad Rafael Landívar
ViVa	Visión con Valores

Prólogo

De Guatemala se dice que es el país de la eterna primavera. Los signos de su historia política, por el contrario, han sido la oscuridad, la violencia y la exclusión.

La democracia debe propiciar la convivencia cívica. La igualdad ciudadana ante la ley, las libertades civiles, la transparencia electoral, la alternancia y la separación de poderes son algunos de sus elementos consubstanciales. En el siglo XX, Guatemala vivió en democracia —imperfecta e incompleta— solamente bajo los gobiernos de Juan José Arévalo Bermejo (1944-1950) y Jacobo Árbenz Guzmán (1950-1954), y a partir de 1986. El parteaguas reciente, sin embargo, no ocurre hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 cuando, finalmente, se dio por concluida la guerra civil. A lo largo de 36 años, la violencia le cobró la vida a más de 200.000 guatemaltecos, una buena parte de ellos indígenas.

Guatemala: Diez años después de los acuerdos de paz firme y duradera relata el encuentro celebrado en la Antigua, del 22 al 24 de marzo de 2007, el primero del proyecto, *Diálogos nacionales sobre la democracia en América Latina*, patrocinado por el Diálogo Interamericano y la Organización de los Estados Americanos. Nos proponemos llevar a cabo ocho diálogos. El de República Dominicana, *Una democracia para vivir mejor*, se efectuó del 5 al 7 de octubre de 2007 en Juan Dolio; el de Chile está en ciernes. Confiamos, asimismo, realizar talleres en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y México.

El objetivo central de los diálogos nacionales es convocar a analistas, políticos, empresarios y actores de la sociedad civil a una reflexión sobre la calidad de la democracia en sus países. En conjunto con un interlocutor nacional, el Diálogo

Interamericano y la OEA buscan que los participantes de estos diálogos definan indicadores con miras a fijar algunos criterios concretos para medir el desarrollo democrático a cinco años luz. La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) fue nuestro interlocutor en Guatemala. En la Antigua participaron 36 guatemaltecos provenientes de diferentes sectores y portadores de diferentes perspectivas políticas.

En cada país, uno de los participantes asume la tarea de la relatoría —en este caso, el doctor Gustavo Porras Castejón— con el fin de elaborar un informe que impulse un debate público sobre gobernabilidad y consolidación democráticas. En éste y los demás casos, los informes expresan exclusivamente la evaluación de los participantes nacionales sobre la actualidad democrática en sus países y los secundan a título personal. Aunque no todos los firmantes —en este caso, los 36 guatemaltecos— suscriben cada frase del texto, todos —con excepción de lo señalado en los comentarios individuales— se adhieren al contenido y tono generales del informe.

La publicación de *Guatemala: Diez años después de los acuerdos de paz firme y duradera* coincide con la inauguración del presidente Álvaro Colom Caballeros. Un nuevo gobierno siempre abre nuevas posibilidades y le deseamos al presidente Colom que las suyas lleguen a buen puerto por el bien común de los guatemaltecos.

Los participantes en la Antigua rindieron un análisis minucioso de los principales logros y retos pendientes después de los Acuerdos de Paz. Dada la historia política de Guatemala, no es poca cosa lo que afirman: que la década de la paz ha representado progreso respecto a las libertades y la democracia política así como a la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. Empero, Guatemala se encuentra muy al principio del trayecto hacia una democracia consolidada e inclusiva.

“Guatemala”, nos dice el informe, “adolece de un déficit de Estado que impide su modernización y la atenuación de los graves problemas sociales”. Si bien la afirmación recoge el sentir de los participantes, el diálogo en la Antigua no se propuso precisar cómo llevarla a la práctica. De esa discusión, precisamente, es que surgen las diferencias. Así y todo, el quid del asunto radica en conjugar el mercado y el Estado en favor de una modernización que, bien lograda, traería un mayor bienestar social.

Para dirimir la conjugación del Estado y el mercado está la política. *Guatemala: Diez años después de los acuerdos de paz firme y duradera* nos dibuja un panorama poco promisorio. El transfuguismo —la facilidad con que los políticos cambian de bancada— acecha a los partidos políticos y éstos, por lo demás, tienden a ser de corta duración. Habrá que ver si la tendencia a una cierta estabilidad de los partidos manifiesta en el ciclo electoral de 2007 se asienta en los próximos años. La penetración de los partidos por el crimen organizado y la desconexión alarmante con las bases ciudadanas son, igualmente, problemas muy serios.

La política debe apasionar, nos recuerda el informe. Así es, aunque valga aclarar que la pasión debe ser por el bien de todos y no por los oscuros enriquecimientos a expensas de la ciudadanía y la legalidad que abundan en todas partes. La gran transformación que aguarda a Guatemala es, sin duda, apasionante: materializar la igualdad ciudadana bajo un Estado de derecho democrático, garantizar la seguridad de la gente ante el crimen organizado y la delincuencia común, vitalizar la credibilidad de las instituciones, ampliar los servicios a las comunidades; en fin, afianzar la democracia.

Para ello hace falta voluntad política, imaginación y tesón. Si, por ejemplo, la Guatemala de 2012 cumple una parte importante de los indicadores que aparecen en las páginas 36 y 37, la vida de todos los guatemaltecos —no sólo la de los más desposeídos— mejoraría. El país adelantaría unos pasos sobre

el trayecto hacia una democracia plena y, por tanto, despejaría algunos nubarrones del presente.

Agradecemos a todos los que hicieron posible el diálogo en la Antigua; en primer lugar, a los guatemaltecos que participaron y, en particular, al entonces Vicepresidente Eduardo Stein Barillas por su intervención inaugural, a Gustavo Porras Castejón, Ricardo Stein Heinemann y Raquel Zelaya Rosales. Marco Antonio Barahona Muñoz (ASIES), Pablo Zúñiga (OEA) y Christian Gómez (Diálogo Interamericano) coordinaron la logística del encuentro. En el Diálogo Interamericano, Christian, Fabián Borges-Herrero y Nathan Doyel apoyaron a Marifeli Pérez-Stable a lo largo del diálogo guatemalteco y la publicación de este informe.

Los *Diálogos nacionales sobre la democracia en América Latina* siguen su curso inmediato con República Dominicana y Chile. Luego vendrán los otros países. En la inauguración del diálogo en la Antigua, el subsecretario Dante Caputo hizo un comentario sobre el rescate del ideal republicano que debemos mantener al frente y al centro siempre: *res publica*, las cosas públicas que nos incumben a todos, si bien no todos somos políticos y, por eso, la revaloración de la política es imprescindible para la democracia.

Dante Caputo
Subsecretario de Asuntos Políticos
Organización de los
Estados Americanos

Peter Hakim
Presidente
Diálogo Interamericano

Marifeli Pérez-Stable
Vicepresidenta para la
Gobernabilidad Democrática
Diálogo Interamericano

GUATEMALA

Diez años después de los acuerdos de paz firme y duradera

El diálogo sobre la democracia en Guatemala se realizó en un momento político dominado por el asesinato, el 19 de febrero de 2007, de tres diputados salvadoreños y su chofer camino a Ciudad de Guatemala para la reunión del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), y por la ejecución en una prisión del Estado de los cuatro policías capturados y sindicados como responsables del crimen. El hecho tuvo amplias repercusiones internas y externas, y afectó especialmente las relaciones entre Guatemala y El Salvador. Uno de los diputados asesinados, Eduardo D'Aubuisson Munguía, era hijo de Roberto D'Aubuisson Arrieta, fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que gobierna en El Salvador desde 1989.

Pero las repercusiones más hondas tocan la situación interna de Guatemala desde varias dimensiones. Su expresión



Peter Hakim y Dante Caputo

más aguda fueron las declaraciones del señor Anders Kompas, representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien calificó la situación de Guatemala como de un “Estado fallido”, determinado fundamentalmente por la incapacidad del Estado para combatir la impunidad, por la participación de agentes del Estado en ejecuciones extrajudiciales, y la sospecha de que el asesinato de los diputados formaba parte de una trama más amplia de limpieza social a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC). Cabe decir que uno de los policías capturados y luego asesinados era el jefe de la división contra el crimen organizado de la PNC. Aunque el 11 de julio de 2007 el fiscal general de la nación declaró que el caso estaba “aclarado y resuelto”, aún no se ha llevado a juicio ni tampoco se conocen quiénes fueron los autores intelectuales del crimen.¹

El diálogo estuvo fuertemente influenciado por estos hechos. En su discurso inaugural, Eduardo Stein Barillas —entonces vicepresidente de la República en el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008)— planteó lo siguiente:

“Se está juzgando la integridad del esfuerzo del Gobierno por un hecho grave que, sin embargo, no anula el conjunto. Lo ocurrido es una expresión de problemas estructurales que los diferentes gobiernos y la sociedad no han podido resolver. Es parte de una cadena que comprende a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público, al Organismo Judicial, a la Procuraduría General de la Nación y al sistema penitenciario. La gran pregunta es: ¿cómo llegar más lejos y más hondo en la destrucción de los aparatos clandestinos? Todos los entes mencionados están penetrados por el crimen organizado. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es un paso en la dirección correcta.”

El Congreso finalmente aprobó por amplio margen (115-24) la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

(CICIG) el 1º de agosto de 2007. Los principales candidatos presidenciales ya se habían pronunciado a su favor. En septiembre, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, nombró al juez español, Carlos Castresana, director de la CICIG. El Ministerio Público asimismo puso 35 fiscales y 20 investigadores al servicio de la comisión que comenzará sus labores en enero de 2008.²

A raíz del décimo aniversario de la firma de la paz se celebraron un conjunto de actividades que involucraron a conglomerados representativos de la sociedad guatemalteca y que tuvieron como objetivo realizar balances de lo ocurrido. Quizá lo más significativo de estos ejercicios fue el reconocimiento, en diverso grado pero prácticamente unánime, que la firma de la paz y los 10 años transcurridos habían comportado cambios favorables para el país, sobre todo en el fortalecimiento de la democracia y el clima de libertades. Esto contrasta con la visión predominantemente crítica que ha prevalecido sobre el tema en las distintas expresiones de la sociedad civil.

Asimismo, durante 2006 se produjo una recuperación sensible del crecimiento económico que se situó alrededor del 5 por ciento, la más alta tasa desde 1977 y, sobre todo, el Gobierno insistió en la importancia de mejorar cualitativamente en la calificación de riesgo país que, además de los económicos, toma en cuenta factores políticos y sociales.³ Para 2007 se estima que la economía tendrá un comportamiento similar, en parte como consecuencia de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio República Dominicana — Centroamérica — Estados Unidos (DR-CAFTA). En el tema fiscal, donde no se habían alcanzado progresos desde el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), se ha registrado un incremento de la tributación debido a la combinación de mejores formas de recaudación y sanción implantadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y un mayor dinamismo económico.⁴

La firma de la paz y los 10 años transcurridos habían comportado cambios favorables para el país, sobre todo en el fortalecimiento de la democracia y el clima de libertades.

La evolución de los indicadores en temas fundamentales como educación y salud ha sido positiva, aunque no excluya deficiencias y limitaciones, y la conflictividad social —básicamente movimientos campesinos y trabajadores del Estado— no ha llegado a niveles de confrontación que amenacen la gobernabilidad.⁵ Incluso en materia de seguridad —sin duda el eslabón más débil— se registraron descensos en delitos como el secuestro, el robo de automóviles y los asaltos a bancos, aunque no así en el índice de homicidios y la captura de droga.

El contexto inmediato en el cual se realizó el diálogo estuvo fuertemente influenciado también por el hecho de que 2007 era un año electoral y que las elecciones estarían marcadas por la incertidumbre en diversos planos. Quizá lo menos trascendente era la especulación sobre el posible ganador. La cuestión de fondo era la percepción, ampliamente extendida, de que las elecciones por sí mismas no representan solución, sobre todo en la debilidad del poder público frente al crimen organizado.

Además, existía el temor de que las nuevas disposiciones de la ley electoral relativas a la colocación de mesas en las aldeas con más de 500 electores podrían complicar los comicios. Estas nuevas reglas fueron acordadas con el fin de darles mayor representación a las zonas rurales, en especial a las comunidades indígenas. Constituían, no obstante, un gran reto logístico para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que supervisaría unas 7.000 mesas electorales adicionales situadas en 687 nuevas circunscripciones en las zonas más remotas del país. Si el TSE no lograba implementar las nuevas disposiciones en toda su complejidad, podrían darse situaciones que invalidaran los resultados electorales. Afortunadamente, la logística electoral transcurrió sin mayores percances respecto a la eficiencia del padrón, la actualización de empadronados y las nuevas juntas receptoras de votos, y no se cuestionaron los resultados.



Marifeli Pérez-Stable, Marta Altoaguirre y Claudia Barrientos

Logros y obstáculos a diez años de los Acuerdos de Paz

El análisis de logros y obstáculos se desarrolló de manera simultánea. Con diferentes matices y reservas se coincide en que la década de la paz ha comportado progreso, sobre todo en materia de democracia política y también en temas específicos de gran trascendencia como la identidad y derechos de los pueblos indígenas. No obstante, el mayor retraso radica en las cuestiones socioeconómicas, las cuales parten de un sistema inicuo que no ofrece oportunidades suficientes para todos. La debilidad del Estado, sin duda, afecta estas cuestiones.

Aunque se reconoce el avance de la democracia política, se considera que aún no se ha logrado una democracia funcional y participativa —en el Estado, sus instituciones, los partidos políticos y la sociedad civil— como la que está planteada en los Acuerdos de Paz. Los obstáculos para lograr una democracia plena comienzan con el tema fiscal, donde aún no se ha alcanzado la carga tributaria pactada en 1996 para el año 2000, es decir, 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El pacto fiscal de referencia se logró en el año 2000. Ni el Presidente Alfonso

Se necesita un poder público fortalecido, un Estado que pueda cumplir con solvencia sus obligaciones constitucionales.

Portillo Cabrera (2000-2004) ni el Presidente Berger, sin embargo, alcanzaron acuerdos suficientes para implementar el grueso de lo pactado, si bien ambos lograron algunas reformas modestas. En 2006, se abrió un proceso ampliamente consultivo liderado por la Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP) que, hasta ahora, no ha dado frutos.

Los consensos y los diálogos siempre se complican o se rompen con el tema tributario. Sin embargo, en el caso de la reunión en la Antigua, hubo una coincidencia general en cuanto a que se necesita un poder público fortalecido, un Estado que pueda cumplir con solvencia sus obligaciones constitucionales, lo cual pasa por el fortalecimiento del sistema tributario y la reforma del Estado. El tema de las tasas impositivas no se tocó, pero sí hubo significativas manifestaciones a favor de cambios legales que podrían mejorar cualitativamente la recaudación, como la obligación de emitir acciones nominales y permitir el acceso de la SAT a la información financiera. Se mencionó también el tema de que los notarios informen a la SAT sobre las transacciones inmobiliarias que realizan, aunque esto ya fue rechazado por el Congreso.⁶

También se planteó como un obstáculo para el logro de una democracia funcional y participativa el peso que ha adquirido en la política, en la formación de opinión pública y aun en la vida académica una concepción del Estado que sostiene que sus funciones deben circunscribirse a la seguridad y la justicia y que, además, argumenta que gravar las rentas es un costo innecesario dado que la empresa privada y el mercado pueden, por sí mismos, responder a las necesidades sociales.

Guatemala, no obstante, adolece de un déficit de Estado que impide su modernización y la atenuación de los graves problemas sociales. Asimismo, se señala como otro factor negativo la crítica excesiva de los medios a las instituciones políticas, en particular

el Congreso de la República y los partidos, lo cual conduce una visión trivial del tema por parte de la opinión pública y a una permanente desvalorización de lo que se ha logrado y de la realidad. Se vincula esto con una concepción de rechazo al Estado, excepto cuando éste beneficie a determinados sectores.

La debilidad del sistema de partidos políticos se identifica como otro gran obstáculo para el logro de una democracia plena. Se señala que, en general, la institucionalidad de los partidos es débil, tanto en términos de su constitución orgánica, de su trabajo de base y de su vida interna, conformándose más bien partidos que funcionan solamente para las elecciones. Entre las causas se identificó el peso desmesurado del dinero privado en la política, correlativo al escaso financiamiento público, lo que da lugar a que los partidos tengan dueño y abre la puerta a la corrupción y a la infiltración por parte del crimen organizado.

Por estas razones, se valoró que en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos se haya restablecido la asignación original de dos dólares (Q15) por voto como financiamiento del Estado a los partidos que hayan obtenido más del 5 por ciento del total de votos válidos en las elecciones presidenciales, medida que entró en vigencia en los comicios de 2007. Se insistió en que la democracia interna es fundamental para la vida institucional de un partido, su representatividad y su función de mediación. En la actualidad, los partidos cumplen formalmente con los procedimientos establecidos en la ley (celebración de asambleas para la elección de candidatos, por ejemplo), pero, en la práctica, distintos factores inciden para que esa elección no refleje necesariamente la voluntad de los militantes sino aspectos tales como los imperativos económicos o las jerarquías rígidas y centralizadas de algunos partidos.

Los efectos negativos de la “privatización” del sistema político se acentúan debido a que la élite empresarial no tiene un proyecto

En el tema fiscal, el Estado ha desarrollado la capacidad de cobrarle a la clase media, más no así a las grandes empresas y a sus propietarios.

definido y coherente a largo plazo y, en cambio, sus intereses puntuales o coyunturales se hacen prevalecer. En el tema fiscal, el Estado ha desarrollado la capacidad de cobrarle a la clase media, más no así a las grandes empresas y a sus propietarios. En general, la debilidad de lo público le abre la puerta a los poderes y a una actitud de los poderosos —sector privado, sindicatos, partidos políticos— de usar el poder sin frenos.

La falta de institucionalidad y arraigo de los partidos políticos, la debilidad de los equipos de Gobierno, los escasos recursos con que cuenta el Estado, el antigobiernismo permanente en los medios, los errores políticos y otros hechos y circunstancias han determinado que, desde el retorno de la democracia en 1986, ningún partido repita ni continúe en el ejercicio del poder. El resultado es una debilidad de la que se tiene creciente conciencia: la falta de continuidad en políticas públicas fundamentales como es el caso de la seguridad.

A la volatilidad de los gobiernos se suma un régimen de servicio civil en el cual un alto porcentaje de cargos y funciones públicas —el 17,5 por ciento según un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— se deciden por discrecionalidad política, lo cual, entre otras cosas, impide la profesionalización de los trabajadores del Estado. Para tener un marco comparativo, el segundo lugar fue para Brasil con 8,6 por ciento y el tercero para Bolivia con 8,1 por ciento, y si se excluyen estos tres países, el promedio para América Latina sería inferior al 1 por ciento. Existe un proyecto para reformar la Ley del Servicio Civil, la cual goza de apoyo y pudiera atenuar la politicización de este sector imprescindible para la modernización del Estado. La Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y el presidente electo, Álvaro Colom Caballeros, han manifestado interés por aprobar la reforma. Los participantes también anotaron la ausencia de un pensamiento estratégico y, en vez de ello, cada quien lucha por

sobrevivir, mal que también aflige a las organizaciones sociales. No se tiene visión de los intereses del Estado.

No obstante, las cosas han cambiado. Los ciudadanos visualizan la democracia de manera diferente, con nuevas expectativas y valores, pero los problemas de hoy no se resuelven con la institucionalidad del pasado. Un punto de consenso es que hay que reformar el Estado, fortaleciendo la gerencia pública, el marco legal, el sistema de controles y un tema muy puntual y acuciante: la inteligencia en todos los sectores y, especialmente, para enfrentar a la delincuencia.

Se ha logrado la paz y la posibilidad de entenderse entre quienes tienen visiones ideológicas y políticas muy distintas. Se avanza en la dirección de la democracia, del diálogo social y participativo, de la libertad de expresión. Mientras hace 20 años la preocupación era los abusos del Estado, ahora se piensa en su fortalecimiento. También se ha registrado un conjunto de desarrollos muy importantes: la pobreza se ha reducido, la educación se ha incrementado y a ojos vista existe una dinámica económica muy intensa en la cual está involucrada, al menos, la mitad de la población. El crecimiento económico se ha producido de manera intensa en sectores importantes de los pueblos indígenas y, más allá del tamaño de estos fenómenos en la actualidad, lo importante es que son tendencias ascendentes.⁷

Pero el talón de Aquiles es el desequilibrio entre lo público y lo privado. La mayor parte del desarrollo anterior no es producto de políticas públicas, sino de los esfuerzos de la población frente a una situación de abandono. En el desarrollo de la economía popular pesan enormemente las remesas, cuyo monto en 2007 sería, según el BID, de más de Q30 mil 360 millones (4 mil millones de dólares), es decir, cercano al presupuesto nacional: aproximadamente Q36 mil 432 millones (4 mil 800 millones de dólares). El efecto neto de las remesas es equivalente a unos Q151 mil 800 millones (20 mil

Los ciudadanos visualizan la democracia de manera diferente, con nuevas expectativas y valores, pero los problemas de hoy no se resuelven con la institucionalidad del pasado.

millones de dólares) de exportaciones, y el impacto social es muy distinto por los sectores sociales que las reciben.

Entre los campesinos, por ejemplo, se han dado procesos de modernización productiva por esfuerzo propio, especialmente en el ámbito de los nuevos cultivos de exportación. El problema es que el desarrollo no es integral, y que la crisis de lo público acecha todo el tiempo lo privado, le resta capacidad expansiva y, en temas como la inseguridad y la impunidad, el deterioro de lo público implica un grave desgaste de la calidad de vida de toda la población. No sólo la pobreza genera conflictos, sino también el déficit en los servicios básicos como la salud y la educación, pues cuando éstos existen hay oportunidades y la población tiene una perspectiva de futuro.

En cuanto a los pueblos indígenas, los participantes indígenas expresaron con distintos énfasis y matices que ha habido progreso, aunque sin la profundidad suficiente como en el caso de la participación indígena en el Estado, que ha aumentado pero casi siempre existe en temas de índole cultural y no en áreas decisivas como las finanzas o la seguridad. Una señal de que, a pesar de todo, se avanza la constituye el reconocimiento de parte del Estado de la discriminación y de la exclusión. El racismo y el colonialismo son, sencillamente, incompatibles con los valores de la democracia.⁸



Enrique Álvarez, Julio Balconi y Andrés Botrán

Instituciones políticas

La discusión se centró en los cambios necesarios y se retomaron los temas fundamentales ya identificados. Asimismo, se planteó la cuestión de por qué estos temas no forman parte de la discusión electoral y lo que esto significa para la representatividad del sistema político.

Los candidatos no discuten el tema de la fiscalidad por ser impopular con los electores, si bien varios de los principales candidatos en la contienda de 2007 tenían conciencia de que lo tendrían que enfrentar de inmediato en caso de resultar electos.⁹ También se señala que en Guatemala hay una presión hacia un pensamiento único, consistente en que todos deben decir lo “políticamente correcto”, sin incursionar en temas conflictivos que, sin embargo, son fundamentales. El debate político no toma en cuenta la capacidad crítica de los ciudadanos.

Si se quiere un Estado eficaz, hay que construir instituciones y, en ese sentido, se valoró la constitución de la SAT, pues su funcionamiento indica que realmente se puede avanzar en el tema de la fiscalidad. Debe darse un diálogo representativo y no corporativo, es decir, un diálogo donde estén efectivamente

El *savoir faire*
político no es
algo espontáneo.
Detrás de los
acuerdos y diálogos
exitosos, siempre
se encuentran
militanes
capacitados.

representados los diversos sectores ciudadanos versus negociaciones sobre la base de intereses creados. Se necesita un diálogo político estratégico. No obstante, uno de los grandes problemas es que los partidos, una vez que toman el poder, comienzan a languidecer y, por tanto, no son posibles diálogos con visión de Estado. La impotencia para tratar determinados temas —por ejemplo, el fiscal— se debe a la insuficiente autonomía de las autoridades públicas con relación a los distintos poderes fácticos, lo cual no es más que una expresión de la debilidad del Estado. Asimismo, mientras impulsa múltiples demandas, la sociedad civil tampoco secunda un pacto que aumente los recursos estatales.

A pesar de insuficiencias y limitaciones, la existencia de un Congreso plural en el cual el partido oficial no cuenta con mayoría, ha facilitado el diálogo político, pero éste no puede ser casuístico sino que debe definir objetivos y estrategias y ampliarse a todo el espectro político. La forma de fortalecer el sistema de partidos políticos es jalarlos a un diálogo serio. Se desarrollan diálogos entre sectores, pero no con los partidos políticos. Se ha subestimado y satanizado la política y, sin embargo, es fundamental abordar el tema y rescatar la escuela política en Guatemala, porque el *savoir faire* político no es algo espontáneo. Detrás de los acuerdos y diálogos exitosos, siempre se encuentran militanes capacitados.

En ese sentido, se señaló que el papel de algunas Organizaciones no gubernamentales (ONG) ha sido sobredimensionado y desnaturalizado, en parte por la incidencia de la cooperación internacional, pero también por las políticas gubernamentales. El gobierno de Berger, por ejemplo, desarrolló una comunicación exhaustiva con las ONG con pocos resultados, mientras le puso mucho menos énfasis al diálogo con los partidos políticos que es el fundamental. Si bien el diálogo social se ha desarrollado, se ha

desgastado, sobre todo porque no compromete formalmente a las partes y porque no hay representación y legitimidad efectivas.

Hay que recuperar la centralidad de la función política. Para que los consensos sociales lleguen a las instancias estatales, además de la voluntad política es necesario conocer y respetar los procedimientos, por ejemplo, planteando las iniciativas ante quien corresponde. La función de la sociedad civil no es sustituir a los diputados sino apoyarlos u oponérseles. El apoyo civil bien manejado puede ser un importante facilitador de decisiones políticas. Todo esto implica que cada uno juegue el rol que le corresponde, sin desnaturalizar las respectivas funciones, una actitud de respeto al poder público aunque éste tenga deficiencias y, también, la existencia de operadores políticos que sepan actuar adecuadamente.

Sobre el tema institucional en general se plantea que los pueblos indígenas han mantenido a través del tiempo sus propias instituciones como las alcaldías indígenas, consultas populares y derecho consuetudinario, todo lo cual ha existido paralelo a la institucionalidad del Estado.¹⁰ Es ésta una institucionalidad que funciona y es legítima, pero a la cual el Estado no le concede el espacio suficiente ni la involucra en los distintos temas de la administración y, en particular, en la seguridad.

La posibilidad de lograr consensos en materia de políticas públicas se ejemplificó con la política contra el hambre, concebida como política de Estado con el involucramiento de la sociedad. En la elaboración se logró juntar a múltiples sectores y se planteó sobre la base de una articulación institucional para integrar y racionalizar esfuerzos. La Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional pasó por unanimidad y el ente rector del programa contempla un 33 por ciento de miembros electos de la sociedad.¹¹

La posibilidad de lograr consensos en materia de políticas públicas se ejemplificó con la política contra el hambre, concebida como política de Estado con el involucramiento de la sociedad.



Ricardo Ardón

Seguridad ciudadana

Existen diversas propuestas de seguridad ciudadana y la cuestión es cómo llevarlas a la acción. ¿Cuáles son los desafíos para el Estado, la sociedad civil, el empresariado y otros sectores? El crimen organizado y las maras, ¿son causa o efecto?¹² ¿Qué se hace para que los medios de comunicación empujen en una misma dirección, aunque con las naturales diferencias?

Se hizo un esbozo general de lo que implica abordar el tema seguridad: por ejemplo, inversión en recurso humano porque se necesita personal altamente calificado, tecnologías de la información y la comunicación, e infraestructura y equipamiento. En la actualidad se da una tendencia acelerada a la privatización de la seguridad: hasta unos 150 mil guardias de seguridad privada frente a los 20 mil del Estado. Tiene que haber una articulación de los sistemas de seguridad y de justicia.

Lo primero es definir la concepción de seguridad. Luego hacer un inventario de los medios de que disponemos y su calidad, tener claridad del rol que cada eslabón en el sistema de seguridad debe cumplir y, finalmente, definir a quién enfrentarse,

De aprobarse por el Congreso, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, ¿qué se hace para implementarla?

lo cual es la parte más débil porque hacen falta muchos recursos de inteligencia. En Centroamérica cada país está haciendo esfuerzos por su lado, cuando es un problema regional. Hay que pasar de un sector de seguridad a un sistema de seguridad. De aprobarse por el Congreso, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, ¿qué se hace para implementarla?¹³

Un factor favorable es que existe un respaldo político para implementar esa ley; hay también organizaciones sociales que han desarrollado un buen nivel de capacidades al respecto. El recién inaugurado gobierno de Álvaro Colom debe tomar medidas en esa dirección, pero en este tema, como en ningún otro, es fundamental la continuidad de lo bien hecho bajo otros gobiernos. Hay que saber lograr consensos sobre lo fundamental, y no, como ha sido costumbre, que cada uno quiera que las cosas sean exactamente a su manera. Así no se logran acuerdos. En el pasado reciente se vivió la experiencia de que se desmontaron estructuras sin tener con qué sustituirlas, como la desmovilización de las patrullas civiles y de determinados destacamentos del Ejército, sin que esos vacíos pudieran colmarse con la PNC. Hacen falta cuadros civiles en el tema seguridad.

A partir de esto último —la carencia de cuadros civiles— se planteó la cuestión de analizar qué estructuras que existan a la mano pueden servir, incluidas las militares, y señalar que para ello habría que abandonar la mentalidad derivada de la guerra civil. En muchos países, las fuerzas policiales tienen una formación militar y, por tanto, para la reestructuración de la PNC no debiera excluirse a los cientos de oficiales que fueron dados de baja y que cuentan con conocimientos, experiencia y una buena hoja de servicios.

El tema de la participación militar en tareas de seguridad generó polémica, se plantea que ello contravenía los Acuerdos de Paz y, por tanto, significaba un retroceso. Sin embargo, dada la escasez de cuadros civiles, en especial mandos para la policía, el tema se podría

resolver con una estrategia de transición, pues el asunto no es solamente a dónde se quiere llegar sino cómo comenzar a caminar hasta allí. Para que sea realista dicha transición tiene que arrancar de pactos políticos que incluyan compromisos de asignación de recursos mediante la aprobación del presupuesto respectivo.

Además de las grandes amenazas como el narcotráfico, hay que tener en cuenta a la delincuencia común, que es la que más golpea a la población y, en este sentido, considerar específicamente la seguridad comunitaria. En el ámbito comunitario hay que recuperar el espacio público: la gente no puede salir a la calle, los niños no pueden ir a la escuela y, por tanto, hay que combinar la legalidad formal con el derecho consuetudinario. Las instituciones indígenas y el derecho consuetudinario pueden contribuir grandemente a la seguridad.

El tema de la delincuencia común que azota a la población y la impotencia de las autoridades tanto policiales como judiciales es lo que conduce a la justicia por propia mano, a los grupos de limpieza social apoyados por la población e, incluso, a casos en que los narcos conquistan simpatía popular reprimiendo a las maras. En el caso del crimen organizado, uno de los problemas fundamentales es disputarles a la población, pues son ellos los que generan medios de vida aunque sean ilegales, y esto, además de sus “contribuciones”, les genera apoyo dentro de las comunidades.

La seguridad es un concepto integral que no se refiere sólo a la esfera delictiva, sino que abarca lo social, laboral y ambiental. Ésta también incluye la seguridad vial que, sobre todo en el transporte extra urbano, adolece de graves deficiencias que causan numerosos accidentes fatales. Si no se toma en cuenta este conjunto de elementos, se puede plantear un falso dilema, el de si es compatible la gobernabilidad con la democracia. Es importante discutir la relación entre democracia y seguridad así

como entre democracia y gobernabilidad. ¿Cuántos derechos democráticos deben sacrificarse en función de la seguridad?

Inclusión y desigualdad

Luego de concluida la Segunda Guerra Mundial, casi todos los países experimentaron una ampliación de la clase media y un aceleramiento de la movilidad social. Si bien esta ampliación también se dio en Guatemala, los sectores medios son muy minoritarios. La brecha económica es muy grande y esto no afecta solamente a los pobres sino al propio desarrollo económico. Aunque se ha avanzado en algunos aspectos, por ejemplo, el mayor acceso a la educación, la exclusión y la concentración de la riqueza van de la mano, lo cual impide la inclusión. El desarrollo social es indispensable para el crecimiento económico.¹⁴ En los países ricos el desarrollo social llegó por la vía del Estado de bienestar, pero ahora la moda es un Estado anoréxico. Si es así, ¿cómo se mejora el nivel de inclusión que, aunque ha avanzado, no es el que necesita la sociedad para impulsar el bienestar colectivo? Se va a a construir una nación además de un Estado moderno?

¿Cómo se mejora el nivel de inclusión que, aunque ha avanzado, no es el que necesita la sociedad para impulsar el bienestar colectivo? ¿Se va a construir una nación además de un Estado moderno?



Valentín Gramajo

En el país ha habido desarrollo y éste ha impactado de manera positiva, aunque relativa, en el bienestar de los sectores marginados. Según el informe sobre la pobreza del Banco Mundial (2003), entre 1995 y 2000, el 55 por ciento de las comunidades indígenas en Guatemala reconocieron que se había progresado, aunque sólo el 3 por ciento percibieron mejoras en la economía familiar. En 2000, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) atribuyó el progreso a la provisión de agua potable, el saneamiento ambiental, mayor acceso a electricidad, teléfonos y educación, así como mejoramientos a la infraestructura. El progreso, por tanto, llegó a través de los servicios públicos, pero sin un desarrollo correlativo de la economía privada. A pesar de las limitaciones, los datos citados ilustran lo que es posible lograr a través de una adecuada provisión de servicios, aun a partir de ingresos tributarios absolutamente insuficientes en comparación, incluso, con los otros países centroamericanos.

Lo anterior también ilustra la desproporción que existe entre la inversión en infraestructura, por una parte, y la ausencia de programas e inversiones para el fomento a la economía popular, por otra. Ésta experimenta una tendencia en ascenso, de nueva cuenta, librada por sus propios recursos, en particular las remesas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2006 las remesas financiaron a más de 300 mil microempresas. Sin embargo, el Estado que en determinados momentos fomentó la economía del café, la industria, el algodón y el azúcar, no ha tenido la voluntad para apoyar la economía popular, lo cual no sólo ensancharía las dimensiones de la economía nacional con beneficio para todos sino, además, podría crear la estabilidad que Guatemala requiere para un progreso sólido.

Respecto a la inclusión de los pueblos indígenas, algunos temen que los indígenas accedan a puestos de poder, lo cual refleja que los guatemaltecos aún no se conocen. Las mesas paritarias

—fruto de los Acuerdos de Paz— permitieron la comunicación que ya es irreversible, si bien insuficiente.¹⁵ En 2007 la proporción de alcaldes indígenas aumentó ligeramente respecto a 2003: un 39 por ciento frente a un 36 por ciento. Rigoberta Menchú Tum —cuya candidatura presidencial inicialmente despertó gran interés— registró un magro 3 por ciento de los votos. Su escaso apoyo se debió a un conjunto de factores, entre ellos, el que las culturas indígenas tiendan al paternalismo, la escasez de recursos económicos y la oposición de la izquierda radical. Así y todo el más importante quizá haya sido que en Guatemala hay 19 grupos indígenas con culturas e idiomas propios y que Menchú —por su larga estadía en México durante la guerra civil— es percibida un tanto ajena a las comunidades indígenas.

La Corte de Constitucionalidad, en tres ocasiones dictó fallos valorando resoluciones de autoridades indígenas. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI) contó con la firma de sólo un indígena. Pero eso no le quita su valor, pues como consecuencia, la educación bilingüe ha tenido un avance muy importante. El ex vicepresidente Stein dedicó el 60 por ciento de su tiempo al tema indígena. Están la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA), la tipificación del delito de discriminación por medio de una reforma al Código Penal en 2002 y, finalmente, la propia Asociación Política de Mujeres Mayas MOLOJ, la cual reivindica la lealtad étnica y promueve la solidaridad entre las indígenas.

Ante la pregunta de cómo lograr que los temas de la inclusión y la desigualdad adquieran la perentoriedad que ahora tiene el tema de seguridad, se señaló que en los medios de comunicación ha habido avances. La agenda mediática contempla temas antes excluidos y tiene como fuentes de información a mujeres y pueblos indígenas, pero hay una gran brecha en lo que los medios

Sigue prevaleciendo la concepción de que la diversidad, lejos de ser una riqueza, es un obstáculo.



Nineth Montenegro y Francisco Villagrán

podrían contribuir para construir ciudadanía. Sigue prevaleciendo la concepción de que la diversidad, lejos de ser una riqueza, es un obstáculo. Ha habido, incluso, persecución penal en contra de no pocas radios comunitarias. Estaciones tales como Los Amates, Vida Súper Stereo y Bienestar Nazareno, ubicadas en el departamento de Izabal, han sido clausuradas por la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas, irónicamente el ente velador por la protección de los trabajadores de la prensa y de la libre emisión del pensamiento.¹⁶ ¿Cómo pues lograr una ciudadanía respetuosa de la diversidad y la diferencia?

En los últimos 20 años ha habido más inclusión de la que hubo en los 200 años anteriores. A pesar de los avances, el ritmo con el cual los rezagos continúan sumándose es preocupante. La desnutrición de los niños, por ejemplo, es algo no recuperable. Ha habido progresos en los mecanismos de recaudación, pero no en la distribución de los recursos. Se trata de incrementar la inversión pública, no el gasto público. Lo que no ha cambiado todavía es que se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas, como en el caso de los bancos. Tanto Bancafé como Banco de Comercio suspendieron sus operaciones en 2006 y

causaron la pérdida de ahorros de los clientes y falta de liquidez en los cajeros automáticos.

Los temas de exclusión y desigualdad fueron los que dividieron al país y hoy lo podrían unir si se convierten en causa común que se enfoque no solamente hacia los organismos del Estado sino que involucre a la sociedad en su conjunto.

Partidos políticos

Hay una insatisfacción muy fuerte con respecto a los partidos y al Congreso: tienen poca credibilidad. Entre los partidos se da el fenómeno del transfuguismo y el peligro de infiltración del narcotráfico; además, la mayoría tiene corta vida. ¿Constituyen los partidos políticos en Guatemala una partidocracia? ¿Qué tan transparentes son los procesos internos? ¿Los ciudadanos se sienten representados por los partidos políticos?

El fenómeno de la decadencia de los partidos políticos es mundial y, por ello, hay que comenzar analizando causas globales, para luego captar mejor las particularidades nacionales. La percepción de la gente es que vive en un mundo sin opciones, donde lo único que queda es administrar bien el sistema, sin que esté planteada su transformación. Esto le quita dramatismo a la política. Antes, cuando la política estaba dividida por la antinomia comunismo-anticomunismo, existían partidos con arraigo social, la política era una cuestión cotidiana, una lucha ideológica, y no sólo ni principalmente una contienda electoral. Bajo la hegemonía del capitalismo global el tema de la economía escapa a la acción de Estados marginales, como el de Guatemala, que no tienen otra opción que adecuarse a los cambios mundiales de manera subordinada. Efectivamente, porque la decadencia de la política es un fenómeno mundial, entidades internacionales como el BID y el Banco Mundial así como los principales cooperantes internacionales revalorizan la política y el Estado.

La demanda
ciudadana de mayor
calidad en la oferta
política choca
con el oligopolio
político derivado
de ser un sistema
privatizado, con
dueños.

El factor fundamental para que se desarrolle el sistema político es la evolución de la conciencia ciudadana, que en Guatemala se desarrolla positivamente, pero la demanda ciudadana de mayor calidad en la oferta política choca con el oligopolio político derivado de ser un sistema privatizado, con dueños. Los partidos actuales no tienen las características de los anteriores (arraigo social, ideología, programas, cuadros, como fue el caso de la Democracia Cristiana). La baja calidad de la mayoría de los diputados está afectada por el hecho de que los candidatos que tienen dinero para financiar sus campañas no son necesariamente los más capaces. No hay lealtad hacia el partido, que es sólo una ficha y, por ende, el transfuguismo.¹⁷ Si se busca en los partidos una oferta que no se encuentra, debería ser posible entrar en esos partidos para cambiarlos o formar nuevos, pero se habla desde la barrera en vez de enfrentar al toro.

Los partidos no atraen a la juventud que trata de hacer las cosas de manera más lúdica. La política debe emocionar, debe gustar. Aunque sus resultados fueron pobres, la candidatura de Rigoberta Menchú despertó expectativas entre los jóvenes; se nota una mayor inclusión de indígenas en las listas de los partidos. Aun sin cambios a la ley electoral, los partidos podrían aprovechar el listado nacional para una mayor inclusión: una representación étnica, de género y de los emigrantes, a quienes se debería dar un espacio.

Uno de los rezagos es la participación y representación de las mujeres indígenas. De 15 partidos, con 432 puestos de comités ejecutivos, sólo 11 son ocupados por mujeres indígenas y 32 por hombres indígenas. Se debe reformar la ley electoral para establecer cuotas en función de la composición étnica de los distritos electorales o departamentos e incluir otras formas de participar políticamente propias de los pueblos indígenas. Los distritos electorales no están conformados para que de allí surjan candidatos representativos de grupos étnicos. Debería

haber partidos regionales y una legislación diferente para los comités cívicos.¹⁸

El descrédito de la política es asimismo fomentado por los medios, lo cual provoca una inhibición a participar pues, quien lo hace, de inmediato se expone a una censura no siempre justificada. El Congreso es un blanco preferido y se critica, por ejemplo, que los diputados opositores negocien con el Gobierno la ubicación geográfica de las obras, cuando jalar obra es una de sus tareas. Lo que debe ser censurable es que se cometan anomalías en la adjudicación, implementación u otros aspectos, y que no se establezca la diferencia entre las negociaciones inherentes a la política y las irregularidades que surjan de estas negociaciones. La prensa prácticamente impone la agenda; si el diputado quiere salir en los medios tiene que ajustarse a las demandas de los periodistas. Es cierto, sin embargo, que los medios son un blanco fácil de culpar. La prensa se ha convertido en un elector cada vez más importante y, por tanto, los monopolios que la controlan deben ser tema de escrutinio público.

Los partidos han ido perdiendo espacio en la medida que ha ido surgiendo un neocorporativismo encarnado por las Organizaciones de la sociedad civil (OSC). Un ejemplo de esto es el pacto fiscal, donde estuvieron presentes las OSC pero no los partidos. Los partidos pierden fuerza y otros sectores la adquieren y tienen más fuerza de la que les corresponde. Pero la pobreza de los partidos obstaculiza la reversión de esa situación. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) que agrupa al sector empresarial guatemalteco, no debería tener el poder que tiene, como tampoco las ONG y las OSC, pero para que no fuera así, los partidos deberían tener sustento y sustancia. Nos hemos acostumbrado a hacer pactos entre la sociedad, pero no con los partidos políticos. Nos sentimos representados por

Como
consecuencia de
la disfuncionalidad
de los partidos,
la ciudadanía no
comprende la
función de los
parlamentos y dice
que sólo hablan y
no hacen.

nuestros líderes sectoriales, pero no por los partidos. No hay partidos históricos, como en Honduras, o partidos que repiten en el poder, como en El Salvador.

Con frecuencia se descarta que pueda haber avances en el tema de los partidos, pero sí los ha habido. Entre otros aspectos, estos avances son fruto de procesos emprendidos por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (nIMD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los mismos partidos están tratando de fortalecer su institucionalidad mediante, por ejemplo, la presentación de un proyecto político propio y la formación política de los cuadros. La Agenda Nacional Compartida —una serie de proyectos de ley considerados de altísima importancia para el país, incluyendo la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad— ha tenido pocos logros.¹⁹ Como consecuencia de la disfuncionalidad de los partidos, la ciudadanía no comprende la función de los parlamentos y dice que sólo hablan y no hacen. Hay que rescatar el debate y salir de los lugares comunes, pero en Guatemala está mal vista la controversia.

También está el tema de los poderes fácticos. Durante la contrainsurgencia el Ejército presionaba a los partidos para que reflejaran sus intereses y, si no, los perseguían. Pero el retiro del Ejército de la política ha abierto el campo. En el caso del poder económico fue muy desafortunado el enfrentamiento por el tema fiscal durante la presidencia de Marco Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1991), miembro de la Democracia Cristiana. La crisis de la DC tiene que ver, en parte, con la resistencia de la cúpula empresarial respecto al tema fiscal, la cual afectó la implementación de muchas políticas públicas.

Dos años después de su elección, Jorge Antonio Serrano Elías (1991-1993) le propinó una fuertísima sacudida al sistema

político. Bajo el manto de combatir la corrupción, el presidente suspendió la Constitución, disolvió el Congreso, impuso la censura a los medios y coartó las libertades. El autogolpe, sin embargo, duró solo unos días por el rechazo rotundo de casi todos los sectores sociales. El presidente y su vicepresidente renunciaron y Ramiro de León Carpio (1993-1996) finalizó el mandato presidencial de Serrano.

El tema fiscal no se trata porque todos aspiran a recibir el apoyo económico de la élite empresarial o, al menos, librarse de su oposición abierta. Es necesario el financiamiento público porque los partidos son un bien público. Tiene que haber un acceso equitativo de los partidos a los medios de comunicación. El señor de los canales le da tiempo en las franjas de baja intensidad a los partidos pequeños y de alta intensidad a sus favoritos. Previo a las elecciones de 1999, por ejemplo, la Asociación de Gerentes no le dio espacio en su foro al Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), por considerar que no tenía posibilidad de ganar y, por ello, no era de interés que la ciudadanía conociera sus planteamientos. Sin embargo Catalina Soberanis Reyes, su candidata, quedó en sexto lugar con un 3 por ciento de los votos válidos.

Se tiene que partir de realidades. A pesar de su desgaste, los partidos políticos son necesarios porque sin ellos no hay democracia. Es necesario un esfuerzo concertado para revigorizar la política. El Foro Permanente de Partidos Políticos es un avance en sí y hay que perseverar.²⁰ Los poderes fácticos del pasado han sido sustituidos. Ya no provienen del Ejército sino del crimen organizado o los petrodólares extranjeros con los que se pretende intervenir en la política guatemalteca. Urge una reforma del Estado y del sistema de partidos políticos que procure un cuadro normativo que sea realmente democrático.

A pesar de su
desgaste, los
partidos políticos
son necesarios
porque sin ellos no
hay democracia.



Raquel Zelaya y Ricardo Stein

Sociedad civil

Los Acuerdos de Paz identificaron la exclusión como causa fundamental del enfrentamiento y plantean que la democracia representativa debe ser también participativa. Hay una vinculación casi automática en el sentido de que la participación se facilita con una sociedad civil robusta y vigorosa. Y si algo resulta evidente en los procesos políticos de los últimos 20 años es la explosión de distintas organizaciones de la sociedad civil y su participación en políticas públicas. Solamente durante el gobierno de Berger se llevaron a cabo 416 reuniones entre las OSC y representantes del Estado.

La proliferación ha dado pie a diversas interpretaciones, entre ellas, una sociedad civil fragmentada que sugiere que un mayor número de organizaciones, lejos de fortalecer su incidencia, la debilita. Esta fragmentación va acompañada de un reclamo en el sentido de que muchas OSC no son representativas ni tienen base social y deberían encontrar convergencias entre ellas en vez de ser expresiones particulares. Frente a esta situación que podría verse negativa, en los últimos años ha habido un gran

avance tanto en el Estado como en la sociedad civil al reconocerse ambos como interlocutores válidos.

Esta discusión apunta a la diferencia entre rescatar y fortalecer los valores republicanos y fortalecer la democracia. ¿Es el fortalecimiento de la sociedad civil un ámbito de rescate de los valores republicanos? ¿Cuál es el papel que le toca jugar a la sociedad civil en las políticas públicas? Si se lograra que los partidos políticos cumplieran cabalmente su función de intermediación, ¿cuál sería el papel de la sociedad civil? ¿Cuál es la relación que existe hoy entre la sociedad civil y los partidos políticos? ¿Cómo debería ser? ¿Qué tan eficaces son las OSC en su gestión? ¿Existe alguna convergencia en temas fundamentales? ¿Existen actores en la sociedad civil que buscan soluciones fuera de la democracia representativa?

El fenómeno de organización que se ha dado en Guatemala es producto de la exclusión histórica y, por tanto, se reacciona buscando participación, pero sin conciencia de los ámbitos y los límites. Hay cosas positivas y otras no. Entre las negativas hay un fenómeno social de desnaturalización de las organizaciones reivindicativas. Lo otro es que, como no prevalece una cultura democrática y de participación, no se hace la distinción clara entre el papel de los grupos de presión y las personas que toman decisiones. Uno de los errores más graves del pasado se encuentra en el pacto fiscal que logró una gran convergencia pero no encontró el punto de equilibrio para saber a dónde y cómo llegar. Se perdió la noción de realidad, se elaboró una propuesta fiscal sin tomarla en cuenta y el Congreso no la aprobó.

Entre los logros de las OSC está haber construido niveles de especialización, por ejemplo en desarrollo agrario, seguridad y sistema de justicia. En la medida que se comprende el papel que a cada quien le toca jugar; entonces se entablan relaciones positivas con las bancadas del Congreso.

Entre los logros de las OSC está haber construido niveles de especialización, por ejemplo en desarrollo agrario, seguridad y sistema de justicia.

La sociedad civil debería sentirse representada en los partidos políticos, pero eso no ocurre por las características actuales de éstos. Aunque se entablan diálogos, las demandas no encuentran eco ni en el Estado ni en los partidos políticos. De esa frustración derivan las manifestaciones populares. La sociedad civil tiene capacidad de propuesta, pero no le gusta que los partidos políticos se la apropien y luego surge la disputa por protagonismos.

Hay que analizar cuál es el rol de las OSC en la nueva etapa que vive el país. Además de presentar propuestas, deben promover su aplicación, lo que implica cabildeo. Luego viene la otra etapa, la de aprobación de las políticas públicas, donde el Congreso no puede ser un mero ratificador de lo que se le plantea ni tampoco exigir al Gobierno que haga lo que dijo un determinado grupo. Otra fase es la de aplicación. Es peligroso que las OSC se conviertan en ejecutoras de políticas, lo cual abre la puerta a la cooptación. Una última fase es la evaluación de los resultados para lo cual todo lo que sea auditoría social es bienvenido. Otro elemento es el financiamiento de estas organizaciones donde debe haber transparencia, igual a la que se le pide al Gobierno o a los partidos políticos. Por último está el tema de la representatividad.

La confusión sobre la naturaleza y el papel de las OSC proviene en buena medida de la cooperación internacional, pues fue en ese ámbito que se acuñó el concepto de que se trataba de los representantes de la sociedad civil. Ahora se dice que son “representativos”, lo cual introduce ya un matiz importante. Sin embargo, es fundamental definir qué abarca ese concepto de sociedad civil, si incluye a las organizaciones comunitarias o a los consejos de desarrollo, por ejemplo, o sólo se refiere a las ONG.

Lo que se cuestiona es el tipo de ONG que no es más que un partido político encubierto que hace política sin asumir

las responsabilidades ni los riesgos. El problema de la falta de representación no es una cuestión formal sino práctica, porque aquellos líderes que no tienen la presión de lograr resultados concretos se empecinan en cuestiones meramente ideológicas o declarativas y es casi imposible lograr acuerdos con ellos. Si bien el esfuerzo del gobierno de Berger de atender a las OSC y ONG fue loable, su interlocución con los partidos políticos representados en el Congreso fue débil, esporádica y casuística pese a que es en esa esfera donde se tomaron las decisiones que facilitaron o entorpecieron la acción gubernamental.

En el tema de los financiamientos internacionales, lo ideal sería que se apoyaran las cuestiones que corresponden a la agenda nacional, pero en la práctica se ha visto mucho apoyo financiero a temas frívolos o modas teóricas. En cuanto a los diálogos del gobierno con las OSC, hay que tomar en cuenta que algunos se hicieron por problemas de gobernabilidad ante medidas de hecho y que la exigencia de que el diálogo sea vinculante va en contra de la formación del poder derivado del voto. Diálogo vinculante y cogobierno son la misma cosa. No obstante, tomando en cuenta que —como ocurre en zonas de predominancia indígena— el Estado no está presente ni cumple sus funciones y, por tanto, las OSC, las ONG y las iglesias las asumen.

Es legítimo que dos o tres personas constituyan una ONG, si bien no lo es que construyan propuestas desde su propia perspectiva, sin consultar a nadie. Esto ha llevado a la llamada “oenegización” en sustitución de las organizaciones sociales surgidas de manera natural en las comunidades. Organizaciones que tenían 30 años fueron echadas abajo por el surgimiento de las ONG que cuentan con fondos. La “oenegización” convertida en un negocio ha ido en contra del esfuerzo comunitario voluntario.

La “oenegización”
convertida en un
negocio ha ido en
contra del esfuerzo
comunitario
voluntario.



Ortencia Simón y Magdalena Cholotío

Los diez años que siguen

Concluimos identificando los principales consensos a lo largo del diálogo así como algunos indicadores para medir en el futuro si Guatemala avanza en el fortalecimiento de la democracia.

Aunque no se abordó el cuánto y el cómo, hubo una amplia coincidencia con relación a la necesidad de un sistema fiscal equitativo que permita financiar un Estado con capacidad de respuesta frente a los desafíos de la educación, la salud, la seguridad y la competitividad. Asimismo, fue muy significativo el consenso en cuanto a la necesidad de fortalecer la recaudación y combatir la evasión con medidas tales como la obligatoriedad de emitir solamente acciones nominales y permitir el acceso de la SAT a la información financiera.

Hubo plena coincidencia en cuanto a la necesaria continuidad de políticas públicas exitosas, consensuadas de manera multipartidaria que se refleja en la aprobación de los presupuestos por el Congreso y, en general, la estabilidad de funcionarios administrativos y técnicos del Estado. Mientras estas funciones y tareas se definan mayormente por criterios políticos, no se desarrollará el capital

humano necesario para la modernización del Estado guatemalteco. El presupuesto de 2008 —aprobado el 27 de noviembre de 2007— fue apoyado por la mayoría de las bancadas, excepto por las del Partido Patriota (PP) y Partido Unionista (PU). El encuentro en la Antigua apuntaba como una buena señal para el próximo Gobierno que se inaugurara con el presupuesto ya aprobado.²¹

En torno a la seguridad, se requiere un consenso nacional como en ningún otro tema. Hay que actuar con el realismo que demandan las circunstancias. La crisis que vivimos —lejos de ser una más— es de grandes proporciones y pone en peligro la gobernabilidad y la institucionalidad democrática. El rumor a nivel nacional que casi provoca la quiebra de uno de los principales bancos demostró que hay estructuras clandestinas que pueden operar en gran escala, y cuya raíz —aún no demostrada— está en la guerra de contrainsurgencia, en la creación de estructuras secretas por el Ejército de Guatemala, las cuales operaron en la más amplia impunidad, y con el tiempo, o quizá desde el principio, se vincularon con el crimen organizado.

Es necesario fortalecer el poder civil, y entender por tal el poder emergido de la Constitución y del sufragio. Fortalecerlo al menos en un doble sentido: que sea un poder con la autonomía suficiente para procurar su fin primordial que es el bien común y, junto con ello, un Estado que cuente con instituciones que realmente funcionen y a las que tenga acceso la población.

En aras del fortalecimiento del poder civil y de esa autonomía relativa, es necesario que los partidos políticos no dependan exclusivamente del financiamiento privado, por lo cual es conveniente que exista financiamiento público. Asimismo, hay que coordinar y complementar esfuerzos en el trabajo con y para los partidos políticos.

Debe emprenderse al menos una reforma parcial del Estado porque se hace evidente el agotamiento de ciertas estructuras

Todos los
guatemaltecos
deben hacer un
compromiso
personal en la lucha
contra la exclusión,
la discriminación y
el racismo.

institucionales. Una es la división territorial que debe modificarse con criterios lingüísticos y socioculturales y que, por tanto, dé lugar a una nueva estructura de distritos electorales. Se necesita una visión del desarrollo rural más allá de la propiedad de la tierra y los recursos naturales. Los estratos sociales que son motores del desarrollo —los jóvenes, los pueblos indígenas y las mujeres— deben beneficiarse de acciones afirmativas de parte del Estado. Asimismo, el Estado debe potenciar lo empresarial con énfasis en las regiones y comunidades. Por último, el poder judicial que debería ser de los más fuertes por ser el que hace posible la gobernabilidad y la convivencia, es en cambio uno de los más golpeados.

Todos los guatemaltecos deben hacer un compromiso personal en la lucha contra la exclusión, la discriminación y el racismo. Que haya un cambio de actitud desde cada uno para conocerse y entenderse como un país diverso. La responsabilidad es de todos, no de uno u otro sector.

A lo largo de estos dos días se reflejó una visión más madura, un esfuerzo de balance, de reconocimiento de los avances y no sólo de señalar lo que falta. Eso se debe irradiar a otros espacios. En la historia de Guatemala se han perdido grandes oportunidades por querer dar saltos en vez de encaminar procesos.

Debe existir una actitud que favorezca la gobernabilidad y la democracia. Se ha aprendido a discutir y a tolerar, pero aún no se ha llegado a un acuerdo sobre el cómo, y ese cómo tiene que ser fruto de un compromiso entre el Estado, los partidos políticos, la sociedad y el sector empresarial.

Más allá de lo ideológico, el contexto internacional está conduciendo a una situación en la que el país no tiene autonomía para hacer lo que quiera y, si no se trabaja por lograr un margen propio, no se llegará a donde se quiere llegar.

Notas

¹ Ex agentes y oficiales de la PNC guardan prisión por su posible ejecución de los asesinatos. Los autores intelectuales aún no se han identificado, si bien se sospecha de algunos ex legisladores vinculados a la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y al Partido de Avanzada Nacional (PAN). Durante un encuentro con el presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca González, el entonces presidente electo, Álvaro Colom dijo: “Esperaría que los avances de la investigación lleguen a su conclusión; si no, tengo el compromiso de llegar a ella”. Si no está resuelto el caso antes de la inauguración de Colom el 14 de enero de 2008, su pronta resolución una vez inaugurado podría darle la oportunidad de demostrar una voluntad firme contra la criminalidad y la impunidad.

² La CICIG fue propuesta en 2006 por el entonces vicepresidente Eduardo Stein e Ibrahim Gambari, entonces vicesecretario general adjunto de las Naciones Unidas. La comisión tendrá un mandato de dos años para investigar posibles vínculos entre el crimen organizado y las instituciones de Guatemala. Sin embargo, la CICIG no está autorizada para entablar procedimientos judiciales que sólo le competen al Ministerio Público.

³ Cada país, de acuerdo con sus condiciones económicas, sociales, políticas o incluso naturales y geográficas, genera un nivel de riesgo específico para las inversiones que se realizan en él. Este riesgo es específico de ese grupo de condiciones y se lo conoce como riesgo país, el cual es evaluado de acuerdo con el conocimiento que cada inversionista tenga de dichas condiciones.

⁴ Establecida en 1998, la SAT es una entidad estatal descentralizada, con competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para ejercer con exclusividad las funciones de administración tributaria. Goza de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa y cuenta con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios.

⁵ Entre 2004 y 2007, la administración de Óscar Berger enfrentó múltiples protestas organizadas por campesinos y trabajadores del Estado opuestos a la adhesión de Guatemala a DR-CAFTA.

⁶ Tanto el acceso de la SAT a la información financiera como el requerimiento a los notarios de informar a la SAT sobre las transacciones inmobiliarias fueron incluidos por el Ministerio de Finanzas Públicas y la SAT en la propuesta original de la ley anti-evasión. Sin embargo, ambas medidas fueron eliminadas por los diputados. En junio de 2006, el Congreso aprobó la Ley de Fortalecimiento de Administración Tributaria.

⁷ La proporción de guatemaltecos que vive en condiciones de pobreza extrema decreció del 15,7 por ciento en 2000 a un 15,2 por ciento en 2006. La proporción de guatemaltecos que vive en condiciones de pobreza general bajó del 56 por ciento en 2000 al 51 por ciento en 2006. El porcentaje de jóvenes de edad relevante matriculados en educación primaria pasó de ser un 82 por ciento en 1999 a un 94 por ciento en 2005. El porcentaje de jóvenes de edad relevante matriculados en educación secundaria pasó de ser un 24 por ciento en 1993 a un 35 por ciento en 2005.

⁸ Proyecto Sistemas de Apoyo a la Presidencia/Vicepresidencia de la República de Guatemala. *Diagnóstico del racismo en Guatemala*. 5 volúmenes. Guatemala: Serviprensa, S. A., 2006.

⁹ Durante la campaña presidencial, la UNE —el partido de Álvaro Colom, inaugurado como Presidente de la República el 14 de enero de 2008— propuso lo siguiente respecto al pacto fiscal: 1) mejorar la eficacia en cuanto a la recaudación, la administración y la lucha contra el contrabando; 2) mayor transparencia respecto a los gastos del Estado; y 3) mejorar la eficiencia de los gastos y las inversiones estatales. Posteriormente, Colom aseguró que el tema impositivo no se trataría en el primer año de su gestión a la espera de las orientaciones fiscales que provengan del pacto de conciliación. Luego de la segunda vuelta electoral, Colom convocó este espacio de diálogo entre todas las fuerzas políticas, sociales y empresariales a fin de trazar conjuntamente una agenda nacional.

¹⁰ Derecho consuetudinario es el derecho basado en usos y costumbres, es decir, normas jurídicas basadas en hechos que se han producido repetidamente en el tiempo en un territorio definido.

¹¹ La ley fue posible gracias a los consensos alcanzados por la Mesa Nacional Alimentaria integrada por Organizaciones de la sociedad civil (OSC), diversas Organizaciones no gubernamentales (ONG), agencias internacionales de cooperación y distintas instituciones públicas. El esfuerzo planteó las “C” del Frente contra el Hambre: conocimiento, comunicación, confianza, compromisos, cohesión y coordinación. La experiencia guatemalteca —liderada en su momento por el secretario de Seguridad Alimentaria en el gobierno de Berger, Andrés Botrán Briz— ha sido estudiada por organismos internacionales y por varios países interesados en reproducirla.

¹² A mediados de junio de 2006, entró en vigor la Ley contra el Crimen Organizado, el Terrorismo y Actividades Conexas que permite las escuchas telefónicas y la utilización de agentes encubiertos. Sin embargo, persisten dudas sobre si el Estado posee los recursos financieros y tecnológicos para llevarla a cabo adecuadamente. Guatemala aún no ha implementado legislación específica para combatir a las maras como las implementadas por El Salvador y Honduras tildadas de “mano dura”.

¹³ La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad pretende crear un ente rector a cargo de coordinar todas las políticas y acciones en materia de seguridad. La propuesta fue aprobada en abril de 2007 durante su primera lectura de un total de tres. Sin embargo, no ha existido el consenso necesario en el Congreso para avanzar la discusión y habrá que ver si el gobierno de Colom logra las dos lecturas pendientes. El Partido Patriota (PP) y la Gran Alianza Nacional (GAN) apoyan la ley marco y lograrían mayoría a su favor si sumaran a 12 diputados de otros partidos.

¹⁴ Investigaciones económicas recientes han demostrado que el combate a la pobreza y la reducción de las desigualdades promueven el crecimiento económico que es, en sí, la forma más efectiva de combatir la pobreza. Es decir, el que América Latina registre altos niveles de pobreza merma el crecimiento económico en la región. La pobreza en América Latina es en sí

una de las causas de sus decepcionantes niveles de crecimiento. Banco Mundial. *Informe sobre el desarrollo mundial 2006: Equidad y desarrollo*. Nueva York: Oxford University Press, 2006.

¹⁵ Las mesas o comisiones paritarias se originaron en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI) contraído por el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) el 31 de marzo de 1995 en México, DF. Las comisiones paritarias trataron cinco temas: reforma y participación, reforma educativa, derechos relativos a la tierra, oficialización de idiomas, y espiritualidad y lugares sagrados. El AIDPI reconoce que los pueblos indígenas han sido discriminados y explotados y que “el tema de identidad y derechos de los pueblos indígenas constituye un punto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y futuro de Guatemala”. El Gobierno se comprometió a promover la revisión de las leyes, hacer cambios en ellas y facilitar una amplia participación de los indígenas en todas las instancias.

¹⁶ Las estaciones fueron clausuradas por no haber pagado la cuota de Q212,5 mil (28 mil dólares) por el uso del espacio electromagnético del país. Estas ripostan que el monto es impagable por los voluntarios que producían programas de noticias y entretenimiento para comunidades indígenas rurales, atentos a sus particularidades lingüísticas y culturales. Se alega, además, que las grandes corporaciones mediáticas presionaron al Gobierno para su clausura.

¹⁷ Transfuguismo es el término que se usa en Guatemala para referirse al acto de cambiar de bancada partidista. En las elecciones presidenciales de 1999, se presentaron ocho candidatos correspondientes a ocho partidos. De éstos, sólo dos presentaron candidatos en las elecciones de 2003. Nueve de los once partidos que compitieron, por tanto, se estrenaron. En 2007, sin embargo, ocho de los partidos de 2003 presentaron candidatos.

¹⁸ Los comités cívicos son organizaciones políticas de carácter temporal que postulan candidatos a cargos de elección popular (alcaldes, síndicos y concejales) para integrar las corporaciones municipales. Su acción se limita al municipio por el cual los candidatos se postulan.

¹⁹ La Agenda Nacional Compartida fue un esfuerzo multipartidario encaminado a la construcción de la gobernabilidad. Aunque representantes de 20 partidos políticos se reunieron a lo largo de 2002 y 2003, no se lograron los acuerdos necesarios para fortalecer al Estado y a la sociedad civil mediante una nueva agenda legislativa.

²⁰ El Foro fue instalado en octubre de 2002 con la participación de todos los partidos políticos debidamente inscritos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y con el apoyo de la OEA. Algunos de sus logros han sido la Agenda Nacional Compartida, la propuesta de ley para la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y el Código de Ética Multipartidario.

²¹ El presupuesto de 2007 nunca se aprobó y, por tanto, siguió vigente el de 2006. La Constitución señala que, en caso de que el Congreso no apruebe un nuevo presupuesto, seguiría vigente el último aprobado. De haber sucedido igual con el de 2008, Colom habría tenido que atenerse al presupuesto de 2006.

Guatemala Indicadores 2012

Categoría	Subcategoría	Indicadores
1. Rol del Estado	1. a) Promoción del desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> • Elevar el porcentaje de jóvenes matriculados en educación secundaria al 45%^a • Reducir tasas de la mortalidad infantil y de la desnutrición crónica en la niñez en un 25%^b • Promulgar una Ley de Desarrollo Rural Integral^c • Crear instituciones fuertes, o fortalecer las existentes, para implementar la ley de desarrollo rural una vez promulgada
	1. b) Tema fiscal	<ul style="list-style-type: none"> • Elevar el ingreso tributario al 12% del PIB^d • Hacer efectiva la Ley de Fortalecimiento de Administración Tributaria (2006) como instrumento contra la evasión
	1. c) Seguridad ciudadana	<ul style="list-style-type: none"> • Reducir tasas de homicidios y de impunidad en un 25%^e • Aprobar e implementar la Ley Marco de Sistema Nacional de Seguridad • Apoyar funcionamiento de la CICIG y su seguimiento por el Ministerio Público^f
	1. d) Competitividad	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliar el Programa Nacional de Competitividad y otros programas que fomenten la economía popular y el sector de pequeñas y medianas empresas^g
	1. e) Gobernabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la posición de Guatemala en las categorías de Estado de derecho, Control sobre la corrupción, Voz y responsabilidad y Efectividad del Gobierno según los indicadores de buen gobierno desarrollados por el Banco Mundial^h
2. Inclusión	2. a) Étnica	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar en un 25% la proporción de representación indígena en el Congresoⁱ • Fortalecer los recursos legales contra el racismo y la discriminación
	2. b) Género	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar en un 25% la representación de la mujer en el Congreso^j
	2. c) Económica	<ul style="list-style-type: none"> • Reducir la tasa de pobreza extrema al 12%^k • Reducir la tasa de pobreza general al menos cinco puntos^l

^a En 2005, un 35% de los jóvenes de edad relevante estaban matriculados en escuelas secundarias.

^b De mil niños nacidos vivos, 43 mueren antes de cumplir el año. Se calcula que la mitad de los niños padecen de desnutrición crónica.

^c Aunque esta ley aún no se ha presentado ante el Congreso, ya existe un anteproyecto elaborado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con su realización. El 72% de los pobres viven en zonas rurales.

^d En 2006, los ingresos tributarios del Gobierno representaban un 10,2% del Producto Interno Bruto. En 1996, se pactó una carga tributaria en 2000 del 12% del PIB.

^e La tasa de homicidios en Guatemala se calcula en un 42 por cada 100.000 habitantes. Según el crimen, la impunidad pueda alcanzar hasta un 98%.

^f La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala investigará cómo opera el crimen organizado en las instituciones públicas y empresas privadas, y pasará los casos detectados al Ministerio Público.

^g Emprende Empresario, por ejemplo, provee asistencia técnica y financiera a pequeñas y medianas empresas. El Estado, sin embargo, no le brinda sistemático a los campesinos ni tiene una visión integral del desarrollo rural.

^h En 2006, la puntuación de Guatemala en las categorías del Banco Mundial la colocó en las posiciones siguientes respecto a los 18 países latinoamericanos incluidos en el estudio: Estado de derecho (17), Control sobre la corrupción (13), Voz y responsabilidad (14) y Efectividad del Gobierno (13).

ⁱ Los indígenas representan el 11% (18 de 158) de los diputados electos en 2007.

^j Las mujeres representan el 13% (20 de 158) de los diputados electos en 2007.

^k Según la ENCOVI de 2006, un 15,2% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema.

^l Según la ENCOVI de 2006, un 51% de la población se encontraba en condiciones de pobreza general.

Guatemala Indicadores 2012

Categoría	Subcategoría	Indicadores
3. Instituciones	3. a) Partidos políticos	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar financiamiento público de los partidos en un 20%^m • Aumentar transparencia financiera de los partidos y aplicar sanciones a los partidos que la incumplanⁿ • Medir la presencia en las elecciones de 2011 de los cinco partidos más votados en 2007^o
	3. b) Presidencia y Congreso de la República	<ul style="list-style-type: none"> • Facilitar la transición de un gobierno a otro a fin de establecer o darle continuidad a las políticas de Estado^p
	3) c) Poder judicial	<ul style="list-style-type: none"> • Incrementar en un 10% los casos de homicidio llevados a juicio^q
	3) d) Policía Nacional Civil	<ul style="list-style-type: none"> • Avanzar en la reestructuración de la PNC^r
4. Relaciones exteriores	4. a) Migración	<ul style="list-style-type: none"> • Lograr una reforma electoral que permita a los guatemaltecos en el exterior votar en las elecciones de 2011 • Repotenciar el diálogo con México sobre asuntos migratorios
	4. b) Remesas	<ul style="list-style-type: none"> • Crear una comisión que incluya al Gobierno, instituciones financieras, el sector privado, la comunidad de donantes internacionales y la diáspora para facilitar el uso de las remesas para el desarrollo^s
	4. c) Criminalidad	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer las comisiones intergubernamentales centroamericanas contra las maras • Incrementar en un 20% las incautaciones de drogas^t

^m Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en 2006 le otorgan dos dólares (Q15) por cada voto obtenido por los partidos. El financiamiento se calcula en base a la mayor cantidad obtenida, bien en primera o en segunda vuelta.

ⁿ En agosto de 2007, el Tribunal Supremo Electoral publicó, por primera vez, una lista de partidos políticos y sus fuentes de ingreso. Sin duda, fue un paso en favor de la democracia, aunque se cuestionaron algunas partidas sometidas y cuatro partidos no sometieron nada. La multa establecida para estos últimos es de Q994 (131 dólares).

^o En 2007, estos partidos fueron: Unión Nacional de la Esperanza, Partido Patriota, Gran Alianza Nacional, Centro de Acción Social y Frente Republicano Guatemalteco. La estabilidad de los partidos se refleja, en parte, por la continuidad de una elección a otra.

^p En 2007, se estableció, por primera vez en Guatemala, un diálogo entre un gobierno saliente y uno entrante. El precedente sentado por Óscar Berger y Álvaro Colom debe aceptarse como norma a seguir para facilitar las transiciones futuras.

^q Menos de 4% de los homicidios —la tasa anual es de 42 por cada 100.000 habitantes— llegan a sentencia judicial.

^r Por ejemplo, dada la carencia de cuadros civiles, permitir el ingreso a la PNC a oficiales del Ejército que fueron dados de baja con una buena hoja de servicios así como buscar la cooperación de las instituciones indígenas y el derecho consuetudinario.

^s Por ejemplo, facilitar las transferencias bancarias con el propósito de reducir los flujos en efectivo y diseñar productos para los receptores de las remesas que incluyan servicios de educación y salud.

^t Se calcula que, por Guatemala, pasan unos 150.000 kilos de cocaína al año; en 2006, se incautaron 281 kilos.

Comentarios

El informe sólo refleja las críticas a la prensa pero no introduce el elemento significativo de la denuncia hecha por los medios de comunicación de las violaciones a los derechos humanos y otros actos contrarios a la progresividad necesaria para la concreción de una democracia republicana.

Aunque se comenta la seguridad vial, es un tema que está fuera de contexto. Hay una diferencia sustancial entre la inseguridad originada en actos que con premeditación violentan los derechos de terceros y los actos “anárquicos” que por su imprudencia impactan a terceros. Creo que los segundos no deben tener cabida en el informe. Se hicieron muchos otros comentarios que quedaron excluidos.

Marta Altolaquirre

La falta de continuidad en políticas públicas fundamentales no se refiere sólo a la seguridad ciudadana. Varios de los participantes insistimos en la necesidad de impulsar una profunda reforma del sistema de partidos políticos, orientada hacia el fortalecimiento de la institucionalidad, la democracia interna de los partidos y su representatividad.

Estoy de acuerdo en que existe una tendencia a la privatización de la seguridad, pero la cifra de 150 mil guardias privados me parece exagerada. Los estimados—no puede conocerse el número exacto porque muchas empresas trabajan sin autorización legal—están en el orden de 60 mil a 100 mil.

Si bien la globalización reduce el margen de autonomía, sobre todo a los países pequeños, decir que estamos “subordinados” me parece una afirmación demasiado absoluta. Hay pequeños espacios para decisiones políticas, especialmente en la protección

y manejo de recursos naturales, y en las negociaciones de tratados en los que pueden defenderse derechos nacionales.

Por último, los partidos sí fueron invitados al diálogo que llevó al pacto fiscal; sin embargo, la mayoría de los que participaron, lo hicieron sólo en la última fase.

Enrique Álvarez

Los medios de comunicación no tienen el descrédito de los políticos, ni en su estrategia de trabajo ni como un fin en sí mismo. Por la censura y autocensura que prevalecieron en la guerra, luego de la transición puede decirse que el péndulo se movió hacia el otro extremo y que a veces se nos ha ido la mano, en especial a principios de los noventa.

Es cierto que a raíz de que se exacerbaran los señalamientos y también los errores y abusos cometidos por los políticos, se ha generado un descrédito de la actividad política en sí. Asimismo, los medios tienen que aprender a ser más finos en sus críticas para que la gente exija mejores congresistas en vez de pretender que borren de un plumazo el Congreso.

Es exagerado decir que los medios imponen la agenda y que el diputado que quiere aparecer en los medios debe someterse a las órdenes tiránicas de los reporteros. Hay diputados con excelente capacidad política y técnica que levantan temas e imponen agenda política. Nineth Montenegro y su fiscalización constante del Ejército es un ejemplo. Ahora bien, hay muchos parlamentarios inútiles que no hacen nada o salen con propuestas de ley que parecen redactadas por niños de primer grado y, por supuesto, no aparecen en los medios. Pero, nuevamente, ¿quién tiene la culpa?: ¿los medios o la falta de formación de cuadros políticos en los partidos?

Es fácil culpar a los medios de las debilidades de los partidos políticos. Hay que reconocer que la prensa ha jugado un papel crucial en la transición democrática y que ha puesto bajo la luz

pública algunos de los principales requisitos para el desarrollo integral del país: la transformación del Ejército en el contexto de una nación democrática y en paz, la urgencia de un auténtico Estado de derecho que ponga fin a la impunidad, la necesidad de transparencia y rendición de cuentas así como de combatir la pobreza y la exclusión.

Lo de “monopolio” no es estrictamente cierto en todos los casos. Sí se puede hablar de monopolio en el caso de la televisión abierta (monopolio, de paso, al que los partidos en el poder y en la oposición nunca han querido entrarle), pero no es cierto en el caso de la radio ni en el de la prensa escrita.

Dina Fernández

Notas biográficas

Richard Aitkenhead Castillo fue comisionado presidencial para la ejecución del programa de gobierno del Presidente Óscar Berger (2004-2008). Fue ministro de Finanzas Públicas (1991-1993) y miembro de la Comisión Presidencial de la Paz (COPAZ).

Marta Altolaquirre Larraondo fue viceministra de Relaciones Exteriores (2004-2008) y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000-2003).

Enrique Álvarez es director del Centro de Incidencia Democrática y fue miembro del Consejo Asesor de Seguridad (CAS) de la Presidencia de la República.

Fernando Andrade Díaz-Durán es director de la Asociación para el Desarrollo Integral de Centroamérica (ADICA). Fue ministro de Relaciones Exteriores (1983-1986).

Roberto Ardón Landívar es director ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

José Alejandro Arévalo Albúrez es vicerector de la Universidad Rafael Landívar (URL). Fue ministro de Finanzas Públicas (1996-1998) y presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en Honduras (1998-2000).

Julio Balconi Turcios es profesor de la URL. Fue miembro del CAS, ministro de la Defensa Nacional (1996-1997) y miembro de la COPAZ (1996-1997).

Marco Antonio Barahona Muñoz es consultor del departamento sociopolítico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).

Felipe Bosch Gutiérrez es presidente del comité de estrategias de la Corporación Multinversiones. Fue presidente (2001) del CACIF.

Andrés Botrán Briz fue secretario de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (2005-2007).

Ana Margarita Castillo Chacón es directora del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos y subdirectora del Sistema Penitenciario.

Medarda Castro Ajcot es consultora del Programa Valores Democráticos y Gerencia Política de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Guatemala.

Magdalena Cholutío es coordinadora general de la Asociación Política de Mujeres Mayas MOLOJ.

Demetrio Cojtí Cuxil es investigador del Centro de Documentación e Investigación Maya. Fue viceministro de Educación (2000-2004).

Doris Cruz es directora del programa Guatemala del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (nIMD).

Miguel de León Ceto es coordinador de la secretaría técnica del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP). Fue secretario de asuntos indígenas de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Dina Fernández García es columnista de opinión del periódico Prensa Libre y directora de la revista Domingo.

Valentín Gramajo Maldonado es secretario general adjunto del Partido Patriota (PP).

René Lam España es vicepresidente de la comisión técnica del grupo político Visión con Valores (ViVa).

José Ángel López Camposeco es presidente del Banco de Desarrollo Rural, S.A. (BANRURAL), directivo de la Organización Internacional del Café y miembro del grupo facilitador del Plan Visión de País. Fue presidente de la Asociación Nacional del Café (2004-2006).

Helen Mack Chang es directora de la Fundación Myrna Mack y presidenta de la Comisión Nacional de Justicia.

Karin de Maldonado es vicepresidenta de la ASIES. Fue directora (1986-1996) del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP).

Nineth Montenegro Cottom es diputada en el Congreso de la República y secretaria general del partido Encuentro por Guatemala (EG).

Marielos Monzón Paredes es periodista y columnista de opinión del periódico Prensa Libre. Fue directora de Radio Universidad.

Juan Carlos Paiz es directivo de la Asociación Guatemalteca de Exportadores. Fue presidente del CACIF.

Gustavo Porras Castejón es consultor del Programa Guatemala del nIMD. Fue secretario privado del Presidente Álvaro Arzú Yrigoyen (1996-2000) y coordinador de la COPAZ (1996-2000).

Álvaro Ramazzini Imeri es obispo de la diócesis de San Marcos y presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala (2006-2008).

Ariel Rivera Irías es decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la URL. Fue viceministro de Finanzas Públicas y de Relaciones Exteriores y embajador ante el Gobierno de Estados Unidos.

Wilson Romero Alvarado es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la URL. Fue secretario general adjunto de la URNG.

Ortencia Simón es coordinadora de proyectos de MOLOJ.

Catalina Soberanis Reyes es miembro del consejo consultivo del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y consultora del Programa Centroamérica de la OEA. Fue ministra de Trabajo y Previsión Social (1986-88), presidenta del Congreso de la República (1991-1992) y secretaria de la Paz (2002-2004).

Ricardo Stein Heinemann es consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Fue director de la Fundación Soros en Guatemala y secretario técnico de la Secretaría de la Paz (1997-1998).

Hugo Us Álvarez es consultor de la oficina del Banco Mundial en Guatemala.

Francisco Villagrán de León es embajador de Guatemala ante la OEA.

Raquel Zelaya Rosales es secretaria ejecutiva de la ASIES. Fue ministra de Finanzas Públicas (1991), secretaria de la Paz (2000-2006) y miembro de la COPAZ (1996-2000).

Diálogos Nacionales sobre la Democracia Guatemala: Diez años después de los Acuerdos de Paz firme y duradera

La Antigua, Guatemala
Porta Hotel, 8a Calle Poniente No.1
22-24 de marzo de 2007

22 de marzo

3:00–4:00 pm *Inscripción y bienvenida*

4:00–6:00 pm **I Sesión Diez años después de los acuerdos de paz**

¿Cuáles son los temas fundamentales —por ejemplo, políticas económicas, reforma fiscal, reformas del Estado, la pobreza, rol del Estado en el desarrollo social, estabilidad institucional y la igualdad ciudadana ante la ley, seguridad ciudadana, cultura política, relaciones con Estados Unidos y con otros países de la región— sobre los cuales hay consenso, entre las élites y en la sociedad, y cuáles sobre los que no lo hay? ¿Cuáles son las dos o tres cuestiones centrales que afectan la consolidación de la democracia en Guatemala?

Modera: **Marifeli Pérez-Stable**, Diálogo Interamericano

6:00–6:15 pm *Pausa*

6:15–8:30 pm **II Sesión Instituciones políticas**

En la práctica, ¿cómo se dan las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo? ¿Han podido trabajar juntos de forma efectiva el presidente y el congreso? ¿Es posible para el gobierno y la oposición encontrar espacios que les permitan negociar y llegar a acuerdos? De lo contrario, ¿existe estancamiento o parálisis? ¿Cómo se expresan e incorporan los intereses de los diferentes sectores de la sociedad civil —particularmente, los que han sido históricamente excluidos— en los procesos de toma de decisiones?

Modera: **Dante Caputo**, OEA

8:30–10:00 pm *Cena*

23 de marzo

8:00–8:30 am *Desayuno*

8:30–11:00 am **III Sesión Seguridad ciudadana**

Existen diversas propuestas sobre el tema de seguridad ciudadana, en diversos grados de desarrollo, incluyendo iniciativas que están siendo conocidas en comisiones legislativas. ¿Cómo pasamos de las propuestas a que se pongan en práctica de manera sostenible? ¿Cuáles son los principales retos o desafíos a los poderes del Estado, al sector privado y a la ciudadanía? ¿Cuáles son las instituciones responsables por la seguridad ciudadana? ¿Cumplen con su cometido? Maras, narcotráfico y crimen organizado, ¿causa o efecto?

Moderador: **Raquel Zelaya**, ASIES

11:00–11:15 am *Pausa*

11:15–1:45 pm **IV Sesión Inclusión y desigualdad**

Desde los Acuerdos de Paz, ¿cuáles han sido los avances y retrocesos respecto a la capacidad del Estado para incidir en favor de la inclusión política, económica y social? ¿Cómo se mide el éxito de este proceso? ¿Se podría decir que las condiciones son mejores que hace cinco años? ¿Cuál ha sido el impacto sobre la cultura política?

Moderador: **Marifeli Pérez-Stable**, Diálogo Interamericano

1:45–3:00 pm *Almuerzo*

3:00–5:00 pm **V Sesión Partidos políticos**

¿Se podría caracterizar el sistema de partidos políticos como una partidocracia o existen controles ciudadanos sobre su funcionamiento? ¿Qué tan transparente son los procesos internos de los partidos políticos y del gobierno? ¿Se sienten los ciudadanos representados por los partidos políticos?

Moderador: **Karin de Maldonado**, ASIES

5:00–5:15 pm *Pausa*

- 5:15–7:30 pm **VI Sesión Sociedad civil**
¿Qué tan eficaz son las organizaciones de la sociedad civil en su gestión? ¿Existe convergencia en temas fundamentales? ¿Existen actores de peso en la sociedad civil que buscan alternativas o soluciones fuera del marco de la democracia representativa?
Modera: **Ricardo Stein**, PNUD
- 7:30–9:00 pm *Cena*

24 de marzo

- 8:00–8:30 am *Desayuno*
- 8:30–11:00 am **VII Sesión Los diez años que siguen**
¿Cuáles son los indicadores centrales —y las estrategias para alcanzarlos— que permitan evaluar los avances democráticos logrados en la Guatemala de 2012?
Modera: **Raquel Zelaya**, ASIES
- 11:00–11:30 am *Cierre*

Bibliografía mínima

Acuerdo de paz firme y duradera. Guatemala, 29 diciembre 1996. <http://www.congreso.gob.gt/Docs/PAZ/Acuerdo%20de%20paz%20firme%20y%20duradera.pdf>

Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra La Impunidad en Guatemala (CICIG). 19 noviembre 2006. <http://www.myrrnamack.org.gt/archivos/CICIG/CICIG%20SPANISH%20FINAL%20EDIT%2011%20Dec%2006.pdf>

Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. México, D.F. 31 marzo 1995. <http://www.congreso.gob.gt/Docs/PAZ/Acuerdo%20sobre%20identidad%20y%20derechos%20de%20los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas.pdf>

Banco Mundial. *Informe sobre el desarrollo mundial 2006: Equidad y desarrollo.* 2006. Nueva York: Oxford University Press.

Diversidad étnico-cultural y desarrollo humano: La ciudadanía en un Estado plural: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005. Guatemala: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. http://www.desarrollohumano.org.gt/content.php?content-type=doc&id=25&id_c=10&title=2005%3A+Guatemala%3A+Diversidad+%C9%tnico-Cultural&PHPSESSID=a954426841ae526c5da2919cb9d1e8a3

Encuesta Nacional sobre Condiciones de vida ENCOVI. 2006. Instituto Nacional de Estadística de Guatemala. http://www.ine.gob.gt/encuestas_encovi.html

Guatemala, Documento de Estrategia País, 2007-2013. 29 marzo 2007. Bruselas: Comisión Europea. http://ec.europa.eu/external_relations/guatemala/csp/07_13_es.pdf

Gutiérrez, Edgar. *Gobernabilidad en Guatemala. Los retos de la agenda de paz, la democracia y el desarrollo.* 30 octubre 2002. Discurso pronunciado en Lima, Perú. II Foro Temático Regional. Gobernabilidad para el Empoderamiento de los Pobres. <http://www.bancomundial.org/foros/sdadcivil/web/guatemala.htm>

Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart and Mastruzzi, Massimo, *Governance Matters VI: Governance Indicators for 1996-2006.* Julio 2007. World Bank Policy Research Working Paper No. 4280 <http://ssrn.com/abstract=999979>

Informe Final: Sub Programa de Diálogo Multipartidario, Guatemala. Febrero 2002—mayo 2004. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. http://www.democraticdialoguenetwork.org/experiences/process/files.pl?process_id=5;type=2;lang=es

International Narcotics Control Strategy Report. Marzo 2007. Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. <http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2007/vol1/html/>

Making the Most of Family Remittances. Second Report of the Inter-American Dialogue Task Force on Remittances. 3 mayo 2007. Washington, D.C. http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/family_remittances.pdf

Poverty in Guatemala. Unidad para la Reducción de la Pobreza y la Gestión Económica para América Latina y el Caribe. 20 febrero 2003. Banco Mundial. Report No. 24221-GU. http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSPContentServer/WDSP/IB/2003/04/05/000094946_03032104003172/Rendered/PDF/multi0page.pdf

Proyecto Sistemas de Apoyo a la Presidencia / Vicepresidencia de la República de Guatemala. *Diagnóstico del racismo en Guatemala*. 5 volúmenes. 2006. Guatemala: Serviprensa, S.A.

UIS Statistics in Brief: Education in Guatemala. 2005. UNESCO Institute for Statistics. http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=3200&BR_Region=40520

World Drug Report 2007. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. http://www.unodc.org/pdf/research/wdr07/WDR_2007.pdf

Diálogo Interamericano

El Diálogo Interamericano es un destacado centro estadounidense de análisis político, comunicación e intercambio sobre temáticas relativas al Hemisferio Occidental. El Diálogo Interamericano convoca a importantes actores de los sectores público y privado de todo el continente con el propósito de analizar las problemáticas y coyunturas hemisféricas de mayor trascendencia.

Su labor apunta a generar ideas y propuestas orientadas a la acción práctica y la potenciación de las políticas públicas, y transmitir las luego a los correspondientes actores públicos y privados del continente. Asimismo, el Diálogo Interamericano otorga a amplios sectores de América Latina y el Caribe la posibilidad de acceder al debate público interno de Estados Unidos. El Diálogo Interamericano, organismo con sede en Washington, realiza actividades en todo el hemisferio.

Desde 1982, a través de sucesivos gobiernos republicanos y demócratas y de múltiples cambios en la conducción de los demás países del hemisferio, el Diálogo Interamericano ha contribuido a definir la agenda de temas y opciones dentro de las relaciones interamericanas.

Organización de los Estados Americanos

La Organización de los Estados Americanos reúne a los países del hemisferio occidental para fortalecer la cooperación mutua en torno a los valores de la democracia, defender los intereses comunes, y debatir los grandes temas de la región y el mundo. Es el principal foro multilateral de la región para el fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos humanos y la lucha contra problemas compartidos como la pobreza, el terrorismo, las drogas y la corrupción. Juega un papel central en el cumplimiento de los mandatos establecidos para la región a través del proceso de Cumbres de las Américas.

Los países miembros establecen políticas y objetivos por medio de la Asamblea General, que convoca a los ministros de Relaciones Exteriores de las Américas a un período ordinario de sesiones que se celebra

todos los años. El Consejo Permanente, conformado por embajadores nombrados por los países miembros, se reúne periódicamente en la sede de la OEA en Washington para ofrecer lineamientos sobre políticas y acuerdos vigentes. La Subsecretaría de Asuntos Políticos dirige los esfuerzos de la OEA para promover la democracia, fortalecer la gobernabilidad y prevenir las crisis políticas.

Asociación de Investigación y Estudios Sociales

Surgida en 1979 y fundada en 1982, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales es una entidad de servicio privada y no lucrativa, orientada a la reflexión, la investigación científica y el análisis de la realidad de Guatemala y Centroamérica. La ASIES trata de estimular la participación ciudadana en los procesos de búsqueda e implementación de soluciones concretas para la problemática del país y de la región.

Entre sus fines, la ASIES lleva a cabo investigaciones y análisis de la realidad política, económico-social y cultural del país y la región mientras promueve el estudio, discusión y reflexión sobre los problemas nacionales y regionales. De tal forma, la ASIES contribuye a la formación de los ciudadanos mediante la difusión de los resultados de sus trabajos de investigación y de análisis de la realidad nacional y regional.



DIÁLOGO INTERAMERICANO
1211 Connecticut Avenue, NW
Suite 510
Washington, DC 20036
1-202-822-9002
<http://www.thedialogue.org>



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
1889 F Street, NW
Washington, DC 20006
1-202-458-3000
<http://www.oas.org>



Asociación de Investigación
y Estudios Sociales

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES
10ª Calle 7-48, zona 9
Apartado Postal: 1005 A
Guatemala, Centroamérica
502-2332-2002
<http://www.asies.org.gt>